



## LOS DÉFICIT DE CIUDADANÍA EN EL PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN EN MÉXICO

Roberto GUTIÉRREZ L.\*

Para todos resulta evidente que en la historia de las disciplinas científicas existen momentos cruciales para el avance del conocimiento. Sin duda, tal es el caso de la aparición de *The Civic Culture*, obra producida por la suma de los talentos de Gabriel Almond y Sydney Verba, que gracias a su originalidad teórica, sistematicidad analítica y rigor comparativo, le abrió a las Ciencias Sociales nuevos horizontes de desarrollo. Es un honor por lo tanto, formar parte de este homenaje al profesor Verba.

El enfoque de la cultura política, construido a partir de la necesidad de establecer una síntesis teórica con capacidad explicativa en torno a los procesos de modernización política desde el ámbito específicamente psiculturales, generó un objeto de conocimiento bastante peculiar. No casualmente las reflexiones y análisis vinculados a tal enfoque en diversas naciones, y México no fue la excepción, se desarrollaron desde disciplinas tan diversas como la sociología, la antropología, la ciencia política, la psicología social e incluso la historia.

A la luz de los resultados producidos a lo largo ya de cinco décadas, debe reconocerse que la transversalidad y la ubicuidad del enfoque de la cultura política dentro de las ciencias sociales ha arrojado resultados más que positivos. Ciertamente —como sucede con toda gran aportación teórica y epistemológica—, de la propuesta original de Almond y Verba se han derivado desarrollos múltiples, algunos de los cuales no podían ser siquiera previstos por sus fundadores. Como una botella lanzada al mar, la propuesta contenida en *The Civic Culture*, arribó a distintos puertos y su mensaje fue interpretado y recreado de diversas formas.

Pero, quizá una de sus ventajas principales haya sido justamente la de su flexibilidad y adaptabilidad, que le permitieron inscribirse dentro de cursos explicativos distintos, dando mayores luces a algunos de los problemas que las disciplinas particulares intentaban abordar con sus propias categorías y metodologías.

\* Doctor en Estudios Sociales. Profesor-investigador titular del departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco.

Indudablemente, la confluencia en este enfoque de categorías como “internalización”, “orientaciones políticas”, “comportamiento político”, “sistema”, “procesos de socialización”, así como “modernización”, “élites”, “masas”, “instituciones democráticas” o “autoritarias”, “cultura súbdito” y “cultura cívica”, que se articulaban con el análisis de los niveles cognoscitivo, afectivo y evaluativo de la cultura política abarcaban un conjunto de fenómenos y procesos que recorrían desde la estructura familiar hasta la del régimen político, pasando por la conformación de los patrones de comportamiento social y hasta por la contraposición de tendencias históricas como el tradicionalismo o la modernidad.

Por ello, cuando se plantea una problemática específica en un contexto histórico particular, se requiere construir, a partir de los elementos presentes en el enfoque original, una definición operativa desde la cual recoger, problematizar e interpretar, los datos provenientes de los estudios empíricos y de otras fuentes de información. En este sentido, y en la medida en que me ha parecido pertinente analizar los déficit de la cultura política en el proceso de consolidación democrática en México, utilizo una definición que se entiende como la síntesis heterogénea y en ocasiones contradictoria de valores, informaciones, juicios y expectativas que conforman la identidad política de los individuos, los grupos sociales o las organizaciones políticas y que, por lo tanto, dibujan el perfil de los sujetos políticos en interacción. De esta premisa cultural se derivan hábitos y formas de comportamiento que deben, por lo mismo, ser leídos como portadores de cierta significación.

Precisando, diría que la cultura política se edifica en torno a referentes tales como la evaluación, conocimientos y vinculaciones afectivas que sujetos individuales y colectivos mantienen con relación al sistema político, su historia y su normatividad; sobre el tipo de participación, negociación o confrontación que se desarrolla alrededor de los centros de decisión, así como sobre el valor y la importancia de la legalidad, la pluralidad, el consenso y el disenso.

Así, al ir delimitando el campo de conocimiento asociado a la cultura política mexicana, resulta ineludible abordar las condiciones históricas de gestación de sus componentes. Esto es, resaltar el tipo de experiencias —y los espacios en que han ocurrido— que han dado lugar al surgimiento de diversas representaciones y posturas respecto al universo de la política. Hablamos, pues, de procesos formativos que transcurren ininterrumpidamente en la cotidianidad de la vida social, pero que se enmarcan y se ligan con instituciones y tradiciones de distinto peso e influencia.

Jerarquizar en una situación particular y dentro de un contexto histórico específico la significación de los distintos espacios y mecanismos formati-

vos —desde los explícitamente políticos como los partidos, las instituciones del sistema y cierto tipo de sindicalismo, hasta los que no lo son de manera tan evidente como la familia, la iglesia, los medios de comunicación y la escuela— ayudará a comprender los rasgos característicos y la importancia relativa de las distintas culturas políticas existentes en una comunidad nacional como la mexicana de principios del siglo XXI. Por supuesto, un itinerario de investigación de esta naturaleza excede los límites de este trabajo, por lo que sólo haré ciertos planteamientos generales que permitan ubicar y ponderar algunos datos agregados de la encuesta que analizamos.

Ciertamente, a la estructuración de la cultura política nacional no le puede ser asignada una fecha de inicio ni se presta tampoco a ser abordada desde una historicidad simple. En realidad, ella se nutre de fuentes y tradiciones diversas, que dan cuerpo a una cultura abigarrada, donde existen y se relacionan historias disímboles, cristalizadas en una subjetividad difícil de captar por análisis mecánico.

No obstante, algunas de ellas han sido especialmente importantes para definir tendencias que han marcado de manera fuerte la cultura política nacional. Con esta advertencia comenzaremos el análisis mencionando, lo que durante décadas constituyó el punto nodal de la relación gobernantes-gobernados en México, esto es, la hegemonía estatal fundada en un tipo especial de consenso, cuya construcción toma varias décadas a los regímenes posrevolucionarios. Esta referencia resulta imprescindible incluso desde la óptica de los cambios observables en los años recientes, pues hacer una evaluación sería de las perspectivas de dichos cambios requiere del conocimiento de aquello a lo que se enfrenta como sedimento histórico aún actuante y que la encuesta permite constatar.

Evidentemente, la Revolución mexicana provocó un cambio de grandes magnitudes en la cultura política, al incorporar tanto en el plano ideológico como en el político-práctico, el paternalismo populista en la tarea de edificar sobre bases renovadas nuestro Estado nacional. De hecho, la debilidad que durante muchos años tuvieron las propuestas político-culturales alternativas, no fue ajena a este fenómeno complejo de interpelación-identificación consolidado en la primera mitad del siglo XX. El surgimiento de México como nación relativamente unificada y de los grupos populares como sujetos políticos, se acompañó de procesos de inclusión corporativa y clientelar de gran alcance que inhibieron el sentido de eficacia y competencia de la ciudadanía y que dejaron poco espacio para la proliferación de percepciones y costumbres distintas al corpus cultural y político hegemónico.

De hecho, podría arriesgarse la hipótesis de que el consenso sobre el que descansó durante largos años de estabilidad del sistema político mexicano

se mantuvo en gran medida por el lugar marginal que en el “imaginario colectivo” tuvieron los proyectos alternativos. Después de todo, a pesar de que la cultura hegemónica estuvo acompañada por la falta de respeto a la legalidad, la desigualdad, la inequidad y el rezago, las expectativas sociales se jugaron básicamente en su terreno gracias a la multiplicación de instituciones y organizaciones que estructuraron la vida pública mexicana.

Como en todo paradigma cultural asociado a la categoría de revolución, aquel que predominó sin contrapesos relevantes durante más de cinco décadas generó una manera de entender la política en la que se combinaron eficazmente el pragmatismo político y la certeza ideológica de que la pluralidad, la auto organización y la participación civil representaban una anomalía en la dinámica de construcción de la unidad nacional.

Lo que de todo ello interesa subrayar, dado el tema que nos ocupa, es el hecho de que la cultura del llamado nacionalismo revolucionario no fue patrimonio exclusivo de una minoría gobernante, paternalista y autoritaria. Sus principales componentes impregnaron de manera fuerte el imaginario colectivo de toda la nación y constituyeron el referente tanto de una forma de ejercer el poder por parte de las élites políticas, como de una “moral social” que asimiló también pragmáticamente sus principales supuestos.

Así, dada la larga hegemonía cultural de un modelo de hacer política que se sustentó en una ecuación donde se vincularon íntimamente las figuras de la nación, el Estado, el gobierno, el partido dominante y sus asociaciones de masas, difícilmente se podría haber dado lugar a la generación de élites políticas portadoras de un bagaje cívico de corte claramente democrático o de una ciudadanía auto organizada y participativa.

Con tales antecedentes, quizá el problema analítico fundamental que se plantea entonces desde la óptica de la configuración actual de la cultura política y sus perspectivas de evolución, consiste en descifrar el peso de las múltiples tendencias reorganizativas que están en marcha en la sociedad mexicana, afectando los patrones tradicionales de comportamiento político e introduciendo nuevas determinaciones en la compleja dinámica de las relaciones de autoridad.

Estudios como el que ha dado origen a este evento, muestran lo útil de estudiar la naturaleza cada vez más diversificada y compleja de una comunidad nacional en la que coexisten el surgimiento de nuevas élites políticas dentro y fuera de los ámbitos tradicionales; una competencia electoral más vigorosa y creíble; medios de comunicación con alcance e influencia creciente y que, no obstante, siguen debatiendo el justo medio entre la libertad y responsabilidad; grupos empresariales cada vez más influyentes y diversificados políticamente; organizaciones no gubernamentales activas y con

arraigo social sustantivo; estructuras de masas corporativas con signos de anquilosamiento evidente, y que sin embargo siguen jugando un papel relevante en el mantenimiento de los equilibrios políticos y la gobernabilidad; un aparato educativo en permanente crisis; una institución eclesíástica cada vez menos cautelosa en materia política y también contradictoria a su interior; la consolidación de una industria cultural comprometida fuertemente con los valores del mercado; el surgimiento de nuevos lenguajes y formas de relación social desarrollados en el marco de los escenarios construidos por la masificación, el hacinamiento, el desempleo, la incertidumbre y el crimen organizado y, por si fuera poco, expresiones armadas en diversas regiones del país.

Así pues, la evaluación de nuestra cultura política no puede eludir el peso de tradiciones históricas aún actuantes ni puede tampoco desentenderse de los fenómenos político-culturales que recién comienzan a manifestarse.

Por lo que dejan ver los resultados de la encuesta, en una situación de transición política como la que ha experimentado el país en los últimos años, no ha sido fácil revertir los efectos de la cultura súbdito pragmática y providencialista derivada de nuestra herencia cultural revolucionaria, para consolidar una cultura de la participación legal, responsable y tolerante, capaz de darle un fundamento sólido a las dos características principales de las democracias modernas: la representatividad de sus instituciones y la gobernabilidad del sistema político en el marco de la vigencia del Estado de derecho.

Ciertamente, la piedra de toque del conjunto de la dinámica sociopolítica, pensada desde la lógica de su democratización, radica en la figura del ciudadano. Al respecto, no pueden soslayarse datos como el que indica que casi el 60% de los ciudadanos considere actualmente que los intereses de la mayoría son ignorados frente a la influencia de personas o grupos específicos (especialmente los partidos y los empresarios).

La baja estima, o confianza en su propia capacidad de influencia política, ha llevado a que más de la mitad de la ciudadanía considere que no podría hacer nada en una situación en la que se estuviera discutiendo en los espacios legislativos una ley apreciada como injusta o dañina. En un plano más general, resulta impactante que el 67.6% de los encuestados confiese nunca haber participado en la toma de decisiones de su comunidad.

Incluso, aunque la utilización del sufragio como recurso político para elegir gobernantes se ha acreditado como una vía reconocida y legítima, los déficit en esa dimensión siguen siendo notables, no sólo por las elevadas tasas de abstencionismo observadas especialmente en las elecciones intermedias, sino por la desafección ciudadana hacia los partidos políticos. Su

baja credibilidad explica por qué el 80% de los ciudadanos no pertenece a ninguno de ellos y da cuenta de que su contacto con tales organizaciones es débil y sumamente esporádico. Y es que la fragilidad de la participación propiamente ciudadana en la esfera pública comienza justamente por la debilidad del autorreconocimiento de los individuos en tanto ciudadanos.\*\*

El descrédito de las instituciones públicas, el encumbramiento de liderazgos autoritarios, la aceptación de relaciones clientelares, el gusto recurrente por concebir los movimientos sociales como grandes gestas justicieras, a reeditarse según algunos con motivo del Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia, la práctica del peticionismo sin correlato de responsabilidad y especialmente la falta de aprecio por la legalidad, han minado las posibilidades de socialización de una cultura cívica capaz de darle un sentido plenamente democrático a los procesos de modernización institucional. En México, a nadie escapa que la continua transgresión de la ley por ciudadanos, movimientos sociales, sectores empresariales y autoridades públicas en todos los niveles, ha trastocado por completo la dinámica social, acercándola al estado prepolítico de los arreglos informales y del predominio del más fuerte. Sin aprecio por la ley, no hay manera de que la estructura propia del Estado de derecho funcione correctamente, ni que la convivencia social transcurra de manera previsible y segura. No es un dato alentador que sólo 28% de los ciudadanos exprese su desacuerdo con la idea de que unos cuantos líderes decididos harían más por el país que todas las leyes.

La fuerza de este sustrato cultural, junto al mantenimiento de profundas desigualdades que no han hecho sino incrementar la tensión y los enconos sociales, ha generado que muchas de las expresiones más visibles de la participación deriven en formas de protesta extrainstitucional, poco proclives a la tolerancia, al diálogo y a la negociación, es decir, a la práctica de la política. No es fortuito que menos del 30% de la ciudadanía crea que la política sí contribuye al mejoramiento del nivel de vida de la población o que menos del 40% considere que las campañas político partidarias son necesarias. En un escenario en que la organización, la participación colectiva, el sentido de eficacia y la credibilidad de las instituciones públicas tienen niveles ciertamente bajos, se explica por qué el 70% de la gente piense que si cada quien no cuida de sí mismo, los demás se aprovecharán. La debilidad del tejido solidario y el protagonismo de lo que Norbert Lechner llamaba las minorías consistentes, parecerían estar en la base de la escasa consisten-

\*\* En la actualidad, los mexicanos asocian muy débilmente la categoría “ciudadano” con los asuntos públicos, los partidos y la política (la asociación con cada concepto la hacen sólo 4.20%, 3.65% y 7.25%).

cia en la participación colectiva bajo encuadres institucionales estables. El hecho de que exista una percepción social negativa acerca de la solidaridad conduce a una sociedad a la atomización y al comportamiento egoísta, lo que se traduce en la dificultad para organizarse colectivamente en torno a una causa común.

Nos encontramos, pues, con una capacidad de autoorganización bastante baja, salvo en ámbitos comunitarios restringidos, en casos extraordinarios (desastres naturales, ayuda eventual a grupos vulnerables o manifestaciones religiosas), en los que se activan los resortes primarios de la solidaridad colectiva o cuando se percibe un ataque a intereses específicos. No es pues extraño que, si se pasa revista a las expresiones más significativas de participación social de los últimos años, sea difícil encontrar en ellas programas sociales o políticos de carácter propositivo y con una perspectiva de mejoramiento de la racionalidad de uno u otro espacio institucional.

Norberto Bobbio planteó en su momento que “el precio que se debe de pagar por el compromiso de pocos es frecuentemente la indiferencia de muchos [de tal manera que] nada sería más peligroso para la democracia que el exceso de democracia”. Ambos lados de la moneda —la participación desbordada y la profunda indiferencia— son perfectamente constatables en el México contemporáneo y se retroalimentan recíprocamente.

Todo lo anterior pone de relieve la importancia de alentar tanto las experiencias prácticas por las que atraviesan los ciudadanos y que pueden resignificar su percepción del universo de la política, como la socialización explícita de los elementos informativos y valorativos que contribuyan a darle un nuevo sentido a tales experiencias. Afortunadamente, en múltiples espacios de socialización es posible encontrar ya prácticas políticas renovadas e iniciativas culturales portadoras de una racionalidad de corte democrático.

Estamos, de hecho, frente a una de las problemáticas más sensibles en la perspectiva de la redefinición del sistema político mexicano y de la consolidación de sus rutinas democráticas. Sin una base social activa, corresponsable y constructiva, el quehacer institucional no encontrará un correlato cívico-cultural capaz de asegurar la viabilidad de sus iniciativas, así como de acompañar, y al mismo tiempo limitar, democráticamente el ejercicio del poder.